

# ¿Por qué los militares chilenos no fueron industrialistas?: Una visión del pensamiento económico de las Fuerzas Armadas

Guillermo Guajardo<sup>1</sup>

## Introducción

A diferencia de los militares de Brasil, Argentina y Perú, que en las décadas de 1960 y 1970 llevaron a cabo una fuerte intervención estatal y protección del mercado interno como retórica y plan de gobierno<sup>2</sup>, los militares chilenos bajo el régimen de Augusto Pinochet (1973-90) dejaron de lado las posturas de nacionalismo económico, mostraron un notable desinterés en la industrialización, promovieron la exportación y el consumo de las clases altas y medias e incluso despreciaron a los «nacionalistas miopes» que sostenían que la industria chilena debería reemplazar los productos que inundaron el mercado nacional<sup>3</sup>.

## ¿Qué explica estas diferencias?

La explicación más convencional es que las fuerzas armadas chilenas no tenían proyecto económico en 1973, fenómeno que correspondía a la conducta seguida por los militares desde 1932 de no intervenir en la vida política. Markoff y Montecinos resumen esta idea: «los economistas de derecha esperaron su hora hasta el golpe de Pinochet, y entonces se ofrecieron a militares carentes de pensamiento económico propio»<sup>4</sup>. Afirmación que resuelve fácilmente el porqué los militares tomaron las soluciones de los «técnicos» y que se repite en los trabajos de Montecinos, Drake y Thorp en donde es ignorada la decisión

clave que permitió la entrada de los «Chicago Boys» en 1975<sup>5</sup>. Pero, además, no se explica el porqué los militares no tuvieron vínculos orgánicos con el modelo implantado desde la década de 1930 basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), en un fuerte papel del Estado en la economía y, en cambio, mostraron tanta afinidad con la desregulación, mayor integración a la economía internacional, descuido del mercado interno y deterioro distributivo, ofrecido como modelo por técnicos cuyas recomendaciones de política económica estaban dirigidas a sustituir las decisiones colectivas por soluciones de mercado<sup>6</sup>.

Para nosotros, una explicación se encuentra más atrás de 1973, cuando los militares, después de haber intervenido políticamente en la década de 1920, quedaron aislados entre 1932 y 1973 del modelo económico que promovía la industrialización. Incluso hay evidencia que indica que desde fines del siglo XIX hasta la década de 1930 hubo iniciativas de las fuerzas armadas para promover industrias e intervenir en la economía que se hicieron manifiestos en la década de 1920 cuando entró en crisis la república oligárquica, pero los efectos de la Gran Depresión y el carácter represor del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-31) generó una reacción civil amplia, cuyo resultado fue desde 1932 la exclusión de los militares del modelo de desarrollo «civil»<sup>7</sup>.

Para ello siempre hubo oposición por parte de la clase política civil, así como del alto mando del Ejército y la Armada a proyectos que preten-dieran cambiar el tradicional perfil primario de la economía chilena. Esto queda corroborado por la opción que tomó Arturo Alessandri después de 1925 de no llevar a cabo el proyecto constitucional y las propuestas económicas planteadas por los movimientos sociales y la oficialidad joven del Ejército<sup>8</sup>.

En ese sentido, después de 1930 los militares quedaron vacíos de propuestas económicas, pero no de todas sino de aquellas que cuestionaban el dominio oligárquico y la inserción internacional de Chile como país exportador de materias primas e importador de tecnología. En cambio, predominó como doctrina oficial la alternativa considerada por los altos mandos y la clase política de unir el fortalecimiento de la nación y de sus fuerzas armadas con una mayor integración a la economía internacional. Desde la Guerra del Pacífico y el ciclo salitrero (1880-1930) se conformó un estilo de modernización militar ligado a la renta del salitre, que desde 1950 giró hacia la del cobre, que no rechazaba el dominio internacional ejercido sucesivamente por Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Por lo cual, los militares se ubicaron como contrarios a cualquier proyecto de cierta autonomía nacional, lo que desde 1973 les permitió intervenir. Creyendo cumplir una labor modernizadora al recurrir a la economía internacional, deterioraron el mercado interno y apoyaron un régimen no democrático.

## Militarismo liberal

Las preguntas sobre la opción militar por un modelo liberal parecen marginales frente a los hechos consumados de la economía chilena y la abundante literatura al respecto<sup>9</sup>. Sin embargo es posible encontrar una respuesta en 1970 cuando Alain Joxe planteó algunas hipótesis.

Joxe indicó que a fines de la década de 1960 se notaba un quiebre en la disciplina de las fuerzas armadas que reflejaba las contradicciones civiles experimentadas por el modelo económico y político llevado a cabo desde la década de 1930. En esa contradicción los militares se ubicaban

como un sector asalariado no productivo dependiente del Estado, que no tenía vínculos orgánicos con las fuerzas productivas locales ni éstas se interesaban en un mercado cuyo gasto militar iba en declive. No obstante, eran un sector que mantenía una fluida relación con Estados Unidos para su equipamiento, perfeccionamiento técnico y profesional<sup>10</sup>. El problema de los militares era cómo definirse frente a proyectos, que cada vez eran más antagónicos, sobre la distribución en una economía dependiente. Joxe planteó la hipótesis de que los militares podían optar por una solución favorable a los intereses estratégicos de Estados Unidos, ya que como clase consumidora no productiva dependiente del exterior y sin vínculos orgánicos con un modelo local de desarrollo basado en la expansión distributiva del mercado interno, frenarían las ambiciones desarrollistas tanto de la clase hegemónica local como del Estado<sup>11</sup>. Esto en caso de que no se solucionara políticamente la contradicción entre el proyecto desarrollista dependiente y el apoyo político de una clase improductiva nacional<sup>12</sup>.

En 1973, la opción hipotética de Joxe fue más extrema, ya que apareció la solución de una mayor integración a la economía internacional dejando a un lado los grupos que basaban su poder en el mercado interno. La intervención militar cambió el balance de poder en el interior de la clase empresarial al favorecer a los grandes grupos económicos que no estaban orientados al mercado interno, lo que se logró en 1975 cuando surgió lo que Silva llama "radical internationalist coalition" con una personalización del poder en Pinochet, desregulación del sector financiero, reducción de tarifas, gran deflación y rápida privatización<sup>13</sup>.

Sobre esta opción, Salazar señala que «sorprende que el librecambismo hipnotice a los militares, al punto de anonadar su lealtad irrestricta hacia lo que la nación real entiende como 'nación' y como 'democracia' ¿Por qué?». Plantea dos explicaciones. La primera es que las fuerzas armadas fueron convocadas como «salvadoras de la nación» por sectores políticos que no contaban con una mayoritaria base social de apoyo y que necesitaban de tutelaje militar. La segunda es que históricamente los períodos en que ha predominado una economía abierta al mercado inter-

nacional y sin protección, los militares se han vinculado a los intereses y armas de las grandes potencias, solucionando problemas geopolíticos, pero jugando internamente un papel relevante para acabar con alternativas nacionales de autonomía. Es decir, nunca han preferido levantar un nacionalismo contrario a las fuerzas del mercado, por lo que el militarismo «productivista» planteado en 1924 por algunos jóvenes oficiales fue olvidado por el alto mando<sup>14</sup>.

En ese sentido, los militares chilenos no han tenido un proyecto histórico propio, pero sí los instrumentos para imponer el único que memorizaron: el modelo liberal<sup>15</sup>. Quiroga señala que en el siglo XIX, en una época de auge del liberalismo y de la economía de exportación, se forjó el *ethos* militar de las fuerzas armadas chilenas. Ampliaron las fronteras internas para la colonización en el sur; incorporaron en el norte nuevos territorios al espacio económico, como el salitre; controlaron a la población indígena y reprimieron los movimientos obreros<sup>16</sup>. En cambio, las corrientes «productivistas» englobaban propuestas dirigidas al desarrollo industrial de las ramas de ingeniería y metalurgia, así como también a expandir las capacidades del mercado interno para lograr una cierta autonomía del exterior. Dichos planteamientos se conformaron desde la década de 1890, surgiendo con gran fuerza a partir de la Primera Guerra Mundial, cobraron nuevo impulso a partir de 1920 cuando una oficialidad joven cuestionó la inserción internacional de la economía chilena, el reparto del poder político y la conformación primario exportadora. Sin embargo, no lograron conformar una ideología bien articulada, sino más bien un conjunto de ideas para lograr autonomía económica y militar con respecto a los vínculos externos que le restaban soberanía al país, contribuir a solucionar los graves problemas sociales de la población chilena y prevenir una posible revolución social. En cambio, la oposición del «alto mando» civil (privado y público) y militar fue más consistente para quebrar un posible consenso de los militares en esas materias.

Ahora bien, esa fortaleza del alto mando para resistir las veleidades reformistas, industrialistas y populistas de la baja oficialidad, se ha ligado a un pensamiento conservador en el cual el golpe

militar de 1973 ha sido visto como un acto de restauración de un pasado idealizado de orden y empuje empresarial cuyas raíces se hunden en el régimen conservador de la primera mitad del siglo XIX<sup>17</sup>. Una aclaración sobre la restauración de la «normalidad capitalista» rota desde 1930 por el avance del «estatismo» y el «populismo»<sup>18</sup> la dio Carlos F. Cáceres, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso con posgrados en Harvard y Cornell, quien fuera ministro del Interior y de Hacienda de Pinochet, miembro de la comisión redactora de la Constitución de 1980 y, en la década de 1990, director de empresas privatizadas durante el régimen militar, figurando en 1997 en el segundo lugar de las mayores dietas percibidas por participar en diez directorios de sociedades anónimas con un ingreso mensual equivalente al salario mínimo de 409 trabaja-dores<sup>19</sup>. Desde esa clara posición en 1982, Cáceres trazó los fundamentos sobre los cuales se basaba el modelo de economía de mercado en Chile:

El tema nos invita a reflexionar sobre el origen de la economía de mercado en Chile. Debemos señalar, sin embargo, que para el caso de nuestro país se trata de la reintroducción de este sistema, ya que una primera experiencia la vivimos en el período que transcurre entre fines del siglo XIX y los primeros años del presente siglo. Hay, sí, una clara diferencia entre ambas experiencias. En la primera, la responsabilidad empresarial la asumieron, en parte importante, hombres de negocio británicos y alemanes que dieron origen a actividades productoras y comerciales en un mercado abierto a la competencia extranjera. La experiencia que hoy estamos viviendo tiene como actores principales la capacidad empresarial chilena en un esquema delineado también por chilenos. Se funda, además, en el conocimiento de la teoría económica y en el diagnóstico realista de las condiciones del país y sus habitantes. El esfuerzo de reconstruir la nación, sumida en una profunda crisis moral y de autoridad, no está exento de obstáculos y adversidades. En la angustia de un periodo que colocó al país en el umbral de la pérdida de sus valores tradicionales, en la clara concepción política del nuevo régimen y en la coherencia para formular las medidas específicas, deben encontrarse los ingredientes más importantes de esta reintroducción de la economía de Mercado en Chile<sup>20</sup>.

La «reintroducción» situó al régimen militar surgido de 1973 no como un paréntesis o una transición, sino la «reinstauración» de la economía de mercado. La idea no era volver a un régimen democrático, porque en eso residía la distorsión «cuyas consecuencias tal vez congénitas o naturales se habían experimentado con tanta profundidad», sino que:

Se reconoció desde el momento de la gestación del movimiento militar que sin una rectificación radical que diera origen a nuevas costumbres políticas, un régimen democrático ilimitado tarde o temprano, y tal vez más temprano que tarde, conduciría nuevamente a la demagogia y a la descomposición social<sup>21</sup>.

Así se dio una conjunción muy particular de la lectura del liberalismo económico por militares antidesarrollistas y economistas liberales en lo económico y autoritarios en lo político.

## La debilidad del productivismo militar

A pesar de tener distintas plataformas tecnológicas tanto el Ejército como la Armada trataron de llevar a cabo proyectos de industrias por el cambio tecnológico que experimentaron las fuerzas armadas desde la década de 1880. Frente a ello, Chile no tenía una base industrial y el crecimiento material del Estado y de sus fuerzas armadas se cubría con importaciones sostenidas en los ingresos del comercio exterior de materias primas, lo que conformó dos gruesos objetivos:

1. Desarrollar industrias metalmeccánicas y de ingeniería por el Estado y, en menor medida, por empresarios privados, con el fin de surtir las necesidades inmediatas de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de ser posible, en la guerra.
2. Tomar control de sectores claves de la infraestructura para asegurar la movilidad de las fuerzas militares, para el Ejército fueron los ferrocarriles y para la Armada los puertos.

Esos objetivos debieron defenderse en las siguientes fases históricas:

- 1865-1887. Aparecen planteamientos para implantar industrias de ingeniería que cubrieran las necesidades de bienes y servicios metalmeccánicos del Ejército y la Marina. Están poco perfilados como proyectos de defensa y

durante la Guerra del Pacífico (1879-83) no dieron origen a industrias de guerra.

- 1890-1914. Durante la carrera de armamentos con Argentina y la profesionalización de las fuerzas armadas, las demandas militares crearon un soporte estatal de fábricas de municiones, talleres, arsenales y astilleros.
- 1914-1924. Emerge con gran fuerza la idea de coordinación económica para la defensa nacional como producto de las experiencias de la Primera Guerra Mundial en Europa, lo que se hace manifiesto desde 1917 con el apareamiento de un pensamiento militar más articulado en torno a la economía y defensa nacional.
- 1924-1932. Lo anterior tendrá su culminación en 1924 con la intervención militar en la política y planteamientos centrados en torno a unir Estado y empresa privada para la industrialización, en donde el sector público tendría un rol preponderante como impulsor y planeador de la economía. Ello se culminará en 1932 con la vuelta a un gobierno civil que cerrará no sólo las propuestas militares, sino que significará su exclusión<sup>22</sup>.

Un punto clave en ello es que estos planteamientos nunca encontraron eco en los empresarios, quienes, en cambio, se coordinaron gremialmente desde 1934 a través de la Confederación de la Producción y el Comercio para tomar distancia respecto del Estado y la clase política, e influir en los planes de infraestructura y productivos que elaborarán conjuntamente con el sector público, los cuales fueron aplicados desde 1940 como planes de acción inmediata por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)<sup>23</sup>.

Paralelo a lo anterior se debe señalar la existencia, desde 1900, de una creciente conflictividad social, que el régimen parlamentario y oligárquico enfrentó con represión militar, culminando en 1907 con la matanza de 3.000 trabajadores salitreros en el puerto de Iquique. Ahí se llegó al clímax de la movilización del aparato militar para fines represivos y la tolerancia de los militares para ser el muro de contención del conflicto social. Razón por la cual, desde 1908, las fuerzas armadas empezaron a ser relevadas de funciones represivas coyunturales, siendo asumidas las tareas por cuerpos policiales especializados que

se centralizarían en 1927 en Carabineros<sup>24</sup>. A su vez, desde la primera Guerra Mundial se buscó introducir reformas que resultaron crecientemente conflictivas hasta que el régimen parlamentario colapsó con la politización de las fuerzas armadas. Entre 1924-25 apareció un Comité Militar, una Junta Militar y una Junta de Gobierno que aprobaron una serie de leyes de carácter social postergadas por el régimen parlamentario; la renuncia del presidente Arturo Alessandri y la redacción de una nueva constitución en 1925 que separó la iglesia del Estado y dio gran poder al ejecutivo<sup>25</sup>. En ese momento afloraron propuestas de modernización económica por militares jóvenes que tuvieron acercamientos bastante intensos con sectores obreros<sup>26</sup>. Pero con la vuelta de Alessandri en 1925 y durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-31) las propuestas fueron desechadas. En particular, Ibáñez eliminó estructuras del antiguo régimen, llevando a cabo en 1927 la salida de elementos oligárquicos del Ejército; centralizó en Carabineros las policías del país, para quitar a los jefes locales el control de una fuerza armada y crear un contrapeso del Ejército y la Armada<sup>27</sup>. Dio también el tránsito económico hacia una mayor diversificación exportadora y el inicio de la ISI apoyada por el Estado, pero no entregó el proyecto económico a los militares o a los empresarios, sino a tecnócratas que en ese momento fueron los ingenieros civiles<sup>28</sup>.

Con la caída de Ibáñez, en 1931, se dio una salida «civilista» desde la derecha con la elección de Arturo Alessandri, en octubre de 1932, y el retorno a un sistema político presidencialista y de partidos. En este escenario, las Fuerzas Armadas fueron depuradas de oficiales y se redujo el contingente de conscriptos del Ejército. A su vez, entre 1932 y 1936 aparecieron cuerpos paramilitares como la Milicia Republicana con 50.000 hombres, que si bien se parecían a los *freikorps* alemanes de la posguerra y de las milicias nazis, su inspiración era la Guardia Nacional organizada en el siglo XIX como contrapeso conservador al Ejército<sup>29</sup>. La depuración del Ejército estuvo dirigida a eliminar elementos nacionalistas, así como también simpatizantes de la izquierda, todo lo cual preparó el camino para un giro de mayor relevancia en el pensamiento económico de los militares durante las décadas de la ISI. Este giro

fue hacia un enfoque «rentista» consagrado durante la segunda presidencia de Carlos Ibáñez (1952-58) a través de la llamada «Ley del Cobre», que reservó para las fuerzas armadas una parte de los ingresos fiscales provenientes de la exportación de cobre<sup>30</sup>. Así, la autonomía militar quedó anclada económica e ideológicamente a uno de los puntales de la economía primario exportadora chilena, en vez de un difícil proyecto de industrialización. En la década de 1950, el crecimiento industrial mostraba signos de estancamiento y de crisis social; en cambio, desde 1945, las exportaciones de cobre representaban más del 50% de las exportaciones totales y para 1955-59 llegaron a cerca de 60%, significando también más del 26% de la recaudación tributaria total del gobierno en el decenio de 1950<sup>31</sup>.

Con ese acto se abandonó cualquier vestigio de un modelo de desarrollo «hacia adentro» y se consolidó una oficialidad poco favorable a los actores que jugaban su desarrollo, expansión y diversificación creciente en el mercado interno. Por lo cual el giro hacia un modelo liberal no estuvo en 1973-75, sino en la década de 1950, cuando se consolidó la depuración productivista llevada a cabo desde 1932 y se establecieron las bases de un proyecto de autonomía militar, perfilándose los militares como uno de los sectores menos comprometidos con una idea de nacionalismo económico, a la que contrapusieron una visión corporativa, antipopular y petrificada en la imagen decimonónica de una dinámica «commodity republic».

## Conclusiones

A diferencia de los militares de Brasil, Argentina, Perú y Ecuador, que en las décadas de 1960 y 70 ejercieron una fuerte intervención estatal, protección del mercado interno y profundización de la industrialización, en Chile los militares bajo el régimen de Augusto Pinochet (1973-90) optaron por políticas que promovían la exportación e incentivaban el consumo de las clases altas y medias, ¿qué explica esas diferencias?

La explicación convencional es que no tenían modelo, pero ¿por qué no tenían modelo económico? Una primera respuesta se encuentra en la década de 1920 con la crisis de la república oligár-

quica, cuando una generación de militares planteó reformas sociales y económicas gestadas durante el ciclo salitrero, que fue el principal motor de crecimiento para hacer de Chile una “commodity republic” exitosa en América Latina<sup>32</sup>. Sin embargo, las propuestas militares fracasaron ya en 1924 y los efectos que tuvo el régimen de Ibáñez sobre la clase política generó, a partir de 1930, un consenso desde la derecha a la izquierda para excluir a los militares. Pero esa decisión preservó enclaves tradicionales en el campo<sup>33</sup> que, sumados durante el gobierno de Allende a los cuestionamientos a la propiedad privada y los vínculos internacionales, crearon un escenario que no había sido «memorizado» históricamente por los militares.

La segunda respuesta es que la oligarquía chilena impidió, a lo largo del siglo XIX y XX, desarrollar un aparato estatal con capacidades autónomas<sup>34</sup> y, dentro de ello, que los militares tuvieran lo que José Luis Romero llamó para el Peronismo una «ideología de estado mayor» que acompañara su proceso de profesionalización. Por lo demás, en Chile el modelo militar era poco cooperativo con el Estado, los sectores obreros y los empresarios, por lo que su ideología de estado mayor no era ni industrialista ni populista, sino que tempranamente tuvo una tendencia liberal en lo económico y antiobrerista en lo político-social.

Por ello, desde una perspectiva histórica, Pinochet hizo lo mismo que la oligarquía del siglo XIX e Ibáñez, es decir, impedir el desarrollo de una «ideología de estado mayor» (productivista) para lo cual hizo entrar a los «Chicago boys» en 1975; Ibáñez, en 1928, lo hizo con la creación del Ministerio de Fomento, encargándole a los ingenieros civiles el proyecto económico. Lo cual plantea algunos aspectos que merecen una exploración para el futuro.

El mantener una inserción dinámica a través de un «commodity» como el salitre permitió su profesionalización y el cobre su autonomía corporativa; en cambio, la industrialización generó problemas complejos y nuevos actores. Además, el alejamiento del modelo de desarrollo no hizo necesario formar una oficialidad sofisticada en el manejo de disciplinas no militares, reflejado en la debilidad del llamado pensamiento geopolítico.

Pinochet, en la década de 1960, impartía la cátedra y con su ascenso al poder convirtió su libro de texto en una síntesis oficial que, a juicio de Canessa, fue el «pensamiento rector, previo, sólido y coherente, que ha ordenado y orientado las políticas sectoriales y las acciones específicas subsiguientes hacia objetivos y fines previstos»<sup>35</sup>. Pero es una doctrina básicamente conservadora y protectora del territorio obtenido en la Guerra del Pacífico (1879) complementado con proyecciones marítimas<sup>36</sup> que podría calificarse de «nacionalismo extractivo», vacío de propuestas de desarrollo para un país cuya economía está limitada al agotamiento de su *stock* de recursos naturales.

En realidad, la ideología de estado mayor más fuerte quedó plasmada en otro acto de la segunda presidencia de Ibáñez, la ley de seguridad interior del estado, de 1958, «que permitía colocar todo o parte del territorio nacional bajo un régimen de Zona de Emergencia, restringiendo algunas libertades públicas en aras del bien común y colocando a la zona respectiva bajo el mando de la Autoridad Militar»<sup>37</sup>. Sin duda, el ejercicio bajo esta ley proporcionó un conocimiento práctico de control útil para el golpe de 1973.

En el nuevo ciclo de democratización parece darse la creencia de que los militares no tienen pensamiento económico, lo cual es falso, ya que las intervenciones militares han sido decisivas para moldear las tareas del Estado en la economía.

## Notas

1. Profesor de América Latina en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de historia económica en el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.
2. Thorp, Rosemary: Progress, Poverty, and exclusion: an economic history of Latin America in the 20th century. Washington D.C.: Inter American Development Bank, 1998, págs. 120-121, 163, 183. Con respecto a los casos más interesantes, tales como el de Brasil, véase Mesquita, Mauricio: Industrialization, Trade, and Market Failures: The Role of Government Intervention in Brazil and South Korea. New York. St. Martin's Press, 1995, y el de Ross Schneider, Ben: Politics within the State: Elite Bureaucrats and Industrial Policy in Authoritarian Brazil. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 1991. Para el caso peruano, véase el clásico trabajo de Stepan, Alfred: The State and Society: Perú in Comparative Perspective. Princeton: Princeton University Press, 1978.

3. Vylder, Stefan De: «Chile 1973-1987: los vaivenes de un modelo», en García, Rigoberto (edit.) Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1989, pág. 57.
4. Markoff, John y Verónica Montecinos: «El irresistible ascenso de los economistas». Desarrollo Económico. 34:133 (1994), pág. 21.
5. Montecinos, Verónica: «Introducción: ambigüedades y paradojas del poder tecnocrático en América Latina». Pensamiento Iberoamericano. Revista de economía política 30 (1997), pág. 19. Drake, Paul: «La economía política de los asesores y prestamistas extranjeros en América Latina». Pensamiento Iberoamericano. Revista de economía política 30 (1997), pág. 79. Thorp: Progress, Poverty, págs. 212, 223.
6. Vylder: «Chile 1973-1987», pág. 56.
7. Algunos de estos aspectos están analizados en Guajardo, Guillermo: «Desde el cuartel: La oposición civil a los proyectos económicos de los militares en Chile, c. 1860-1930», en Forte, Riccardo y Guillermo Guajardo (coords.) [con la colaboración de María Luna]: Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina. México D.F.: El Colegio de México-El Colegio Mexiquense, 1999.
8. Salazar, Gabriel, Arturo Mancilla y Carlos Durán: «Estado, legitimidad, ciudadanía», en Salazar, Gabriel y Julio Pinto (eds.): Historia contemporánea de Chile. Volumen 1. Santiago: LOM Ediciones, 1999, vol. 1, pág. 43.
9. Para una visión de la economía chilena como rupturista con las presiones populistas, véase: Dornbusch, Rudiger and Sebastian Edwards. The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: The University of Chicago Press, 1991. Edwards, Sebastian: Crisis and Reform in Latin America. From Despair to Hope. Washington D.C.-New York: World Bank-Oxford University Press, 1995.
10. Joxe, Alain. Las fuerzas armadas en el sistema político chileno. Santiago: Editorial Universitaria, 1970, págs. 152-153.
11. *Ibid.*, pág. 153.
12. *Ibid.*, pág. 154.
13. Silva, Eduardo: The State and Capital in Chile. Business, Elites, Technocrats, and Market Economics. Boulder, CO: Westview Press, 1996, págs. 80, 90, 98. Otros trabajos también se refieren a esa decisión, como el de Sigmund, Paul E.: «The Military in Chile», en Wesson, Robert (edit.): New Military Politics in Latin America. New York: Praeger, 1982, así como también el de Valdés, Juan Gabriel: Pinochet's Economist: The Chicago School in Chile. New York and Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
14. Salazar, Mancilla y Durán: Estado, legitimidad, vol. 1, págs. 172-173.
15. Salazar, Gabriel: «Los límites históricos de la modernidad (neo) liberal en Chile». Cuadernos de Historia 12 (1992), pág. 99.
16. Algunos puntos de esas misiones están contenidos en Quiroga Z., Patricio: «El prusianismo en las fuerzas armadas chilenas. Un esquema de evolución histórico, 1885-1918». Revista Andes 1 (1984), págs. 89-119.
17. Con respecto a la bibliografía que justificaba las raíces históricas de la «nueva democracia» que representaba para los sectores nacionalistas el régimen militar, véase: Nunn, Frederick M.: «Chile since 1973: Historical and Political Perspectives». Latin American Research Review. XIV:2 (1979), págs. 287-294.
18. Una crítica al modelo de los militares en que se plantea el aspecto restaurador de la «normalidad capitalista» está en García, Alvaro and John Wells: «Chile: a Laboratory for Failed Experiments in Capitalist Political Economy». Cambridge Journal of Economics. 7 (1983), págs. 287-304.
19. Además es un exponente muy completo del enfoque ultraliberal, ya que como miembro de la Fundación Mont Pelerin invitó a Hayek a visitar Chile; también como miembro de las comisiones redactoras de la Constitución de 1980 apoyó las posturas más restrictivas para el ejercicio de la democracia al defender el voto corporativo, basado en su desconfianza en las opciones del electorado, postura que incluso en ese marco no fue aceptada. Con respecto a su participación en un grupo empresarial producto de la dictadura, véase Fazio, Hugo: Mapa actual de la extrema riqueza en Chile. Santiago: LOM Ediciones-Universidad ARCIS, 1997, págs. 200-201.
20. Cáceres, Carlos Francisco: «La vía chilena a la economía de mercado». Ercilla Económico 25 (Mayo, 1982), pág. 2.
21. *Ibid.*, pág. 8.
22. Estos proyectos están analizados en forma extensa en un libro en prensa: Guajardo, Guillermo: El pensamiento económico de los militares chilenos en perspectiva histórica. Para una síntesis, véase del mismo autor: «Desde el cuartel».
23. Véase Ibáñez Santa María, Adolfo: «El liderazgo en los gremios empresariales y su contribución al desarrollo del Estado moderno durante la década de 1930. El fomento de la producción y los antecedentes de la CORFO», Historia 28 (1994), pág. 183-216. Muñoz Gomá, Oscar (edit): Historias personales, políticas públicas [entrevistas de Margarita Serrano y Marcia Scantlebury]. Santiago: Editorial Los Andes-CIEPLAN, 1993.
24. Maldonado Prieto, Carlos: «Los Carabineros de Chile: Historia de una policía militarizada». Ibero-Americana. Nordic Journal of Latin American Studies XX: 3 (1990), págs. 3-31.
25. Monteón, Michael: Chile in the Nitrate Era. The Evolution of Economic Dependence, 1880-1930. Madison: The University of Wisconsin Press, 1982, y del mismo autor, Chile and the Great Depression. The Politics of Underdevelopment, 1927-1948. Tempe, Ariz.: Arizona State University, 1998.
26. A este respecto, véase: Díaz Gallardo, José: «El Ejército y las organizaciones laborales revolucionarias, 1924-1927». Tesis para obtener el grado de Licenciado en Historia, Instituto de Historia, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1991. Piuizzi, José Miguel: «Los militares en la sociedad chilena, 1891-1970. Relaciones civiles-militares e integración social». Tesis Doctor en Sociología. Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología «León XIII». Madrid, 1993, 2 vols.
27. Domínguez, Francisco: «Carlos Ibáñez del Campo: Failed Dictator and Unwitting Architect of Political Democracy in Chile, 1927-31», en Fowler, Will (edit.): Authoritarianism in Latin America since Independence. Westport, Conn. and London: Greenwood Press, 1996, pág. 57.
28. *Ibid.*, pág. 47.

29. Quiroga. «El prusianismo», pág. 114. Además, véase Maldonado, Carlos: La Milicia Republicana. Historia de un ejército civil en Chile, 1932/1936. Santiago: Servicio Universitario Mundial, 1988. Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica: Las Milicias Republicanas. Los civiles en armas, 1932-1936. Santiago: Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, 1992.
30. Se trata de la ley 13.196 de 1958 que dispuso un aporte financiero a las fuerzas armadas basado en la tributación a la minería del cobre en manos de compañías extranjeras. A fines de 1973 se reformó, aplicando el impuesto sobre ventas al exterior y fijando, además, un piso mínimo de 90 millones de dólares, el cual más tarde se modificó y se le introdujo una reajustabilidad al piso, según el índice de precios al por mayor de los Estados Unidos. Varas, Augusto y Claudio Fuentes: Defensa nacional, Chile 1990-1994. Modernización y desarrollo. Santiago: Libros FLACSO, 1994, pág. 95.
31. Meller, Patricio: "Una perspectiva de largo plazo del desarrollo económico chileno, 1880-1990", en Blomström, Magnus y Patricio Meller (eds.): Trayectorias divergentes. Comparación de un siglo de desarrollo económico latinoamericano y escandinavo. Santiago: CIEPLAN-Hachette, 1990, pág. 60.
32. Meller. "Una perspectiva», pág. 54. Bulmer-Thomas, Victor: The Economic History of Latin America since Independence. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1994, págs. 48-154.
33. Kay, Cristóbal: «Political Economy, Class Alliances, and Agrarian Change in Chile». The Journal of Peasant Studies 8:4 (1981), págs. 485-513. Zeitlin, Maurice y Richard E. Ratcliff: Landlords & Capitalist. The Dominant Class of Chile. Princeton: Princeton University Press, 1988.
34. Jocelyn-Holt, Alfredo: El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Santiago: Planeta-Ariel, 1998.
35. Canessa Robert, Julio: Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor militar 1924-1973. Santiago: Emérida Ediciones, 1995, pág. 264.
36. Child, John: «Geopolitical Thinking in Latin America». Latin American Research Review. XIV:2 (1979), pp.102-105.
37. Canessa. Quiebre y recuperación, pág. 179.